



# INFORME SOBRE ACTUACIONES POLICIALES Y MILITARES VIOLATORIAS A DERECHOS HUMANOS DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19

San Salvador, 12 de abril 2020.

## Contenido

<b>I.</b>	<b>Mandato y contexto de actuación .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Atención de casos y gestiones institucionales .....</b>	<b>5</b>
1.	<i>Perfil de víctimas por edades y género.....</i>	<i>5</i>
2.	<i>Derechos vulnerados y autoridades vinculadas.....</i>	<i>7</i>
3.	<i>Gestiones institucionales realizadas .....</i>	<i>9</i>
<b>III.</b>	<b>Verificación de controles vehiculares.....</b>	<b>11</b>
<b>IV.</b>	<b>Consideraciones y Recomendaciones.....</b>	<b>13</b>

## **I. Mandato y contexto de actuación**

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la epidemia del coronavirus COVID 19 como una emergencia de salud pública de preocupación internacional (30 de enero 2020) y posterior declaratoria de pandemia (11 de marzo 2020); la respuesta gradual de los Estados a nivel global se ha dirigido prioritariamente a prevenir, proteger y brindar atención sanitaria a la población contra las afectaciones al derecho a la vida y la salud de las personas, tomando decisiones para limitar la interacción social, el control de fronteras y medidas de alejamiento.

Sin duda alguna, en situaciones de grave emergencia como la actual, los derechos humanos pueden limitarse en beneficio del interés público; sin embargo, los Estados se encuentran obligados a realizar los esfuerzos necesarios para protegerlos en toda circunstancia, debiendo adoptar decisiones que sean razonables, proporcionales, equitativas, no discriminatorias y en plena conformidad con la normativa nacional e internacional<sup>1</sup>.

En el caso salvadoreño se ha emitido e implementado diversos decretos legislativos y ejecutivos que gradualmente están configurando la respuesta estatal ante la emergencia vinculados a la restricción de derechos específicos. En ese contexto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se ha mantenido en constante vigilancia de las actuaciones estatales, por lo que de manera gradual y permanente se ha realizado diversas gestiones y recomendaciones tanto a la institucionalidad pública como a la población en distintas temáticas vinculadas a la emergencia.

Se ha mantenido la atención de personas usuarias a nivel nacional, utilizando distintos medios, primero de forma presencial y, una vez confirmados los primeros casos de COVID-19, por vía telemática y llamadas telefónicas. De manera particular se ha habilitado

---

<sup>1</sup> OMS "Consideraciones éticas en el desarrollo de una respuesta de salud pública a la gripe pandémica" Disponible en [www.who.int/csr/resources/publications](http://www.who.int/csr/resources/publications) y Comunicado de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet relativo a que los gobiernos tomen medidas para detener la difusión del coronavirus COVID-19 y también que emprendan otras iniciativas para reducir la posible repercusión negativa que esas medidas podrían tener sobre la vida de las personas. Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPageSP=true&LangID=5>

el envío de avisos a través de una aplicación informática disponible para descargar y a través de la página web institucional. Estas decisiones han tenido como base la protección de las personas usuarias y del personal institucional, así como el acatamiento de las medidas estatales de contención, girando directrices para realizar un nuevo tipo de verificación sobre la respuesta estatal y el impacto a los derechos humanos de la población salvadoreña originados por la pandemia.

En el caso particular del monitoreo y vigilancia de las actuaciones policiales vinculadas a los derechos a la libertad, la seguridad y la integridad personal, se ha reconocido que la Policía Nacional Civil (PNC), está facultada constitucional y legalmente para realizar procedimientos de detención, patrullajes preventivos y disuasorios y la aprehensión de personas infractoras en el ejercicio del poder coercitivo a través del uso legítimo de la fuerza con el fin de garantizar el orden, tranquilidad y seguridad pública en todo el territorio nacional; sin embargo, también se ha advertido reiteradamente que tales operaciones deben hacerse en el marco del respeto de los derechos humanos y dentro de los límites del uso de la fuerza pues deben ir orientados al respeto de la dignidad humana, a la integridad física y psíquica de las personas.

Estas consideraciones se mantienen vigentes y se refuerzan, en el marco de la participación policial ante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, intensificando las medidas de prevención, control y protección de la población en general, según lo establecido en los diferentes Decretos Legislativos y Ejecutivos que se han aprobado para proteger la vida y salud de quienes habitamos este país.

En ese sentido, una acción primordial que debe realizarse desde la PNC es actualizar, difundir adecuada y permanentemente su protocolo de actuación de forma operativa y administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de dichos Decretos y demás leyes nacionales e internacionales vigentes. De igual manera debe tomar en consideración que debe cumplirse de manera integral las recomendaciones de esta Procuraduría realiza mediante resoluciones, medidas cautelares y pronunciamientos; así como también debe cumplirse con las decisiones emanadas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que establecen la obligación de evitar la privación de libertad de una persona

mientras no haya una norma formal que lo habilite y conducirla obligatoriamente a un centro de contención de la pandemia sin que se establezca de modo objetivo que pueda ser fuente de contagio, especialmente cuando se considere discrecional y arbitrariamente que ha violentado la cuarentena domiciliar<sup>2</sup>.

Para ello, el Protocolo de Actuación de la Policía Nacional Civil en el contexto que nos encontramos establece los pasos a seguir en caso de localización de personas que presuntamente incumplan la cuarentena domiciliar, entre estos, identificar a la persona, entrevistarla para determinar los motivos por los cuales se encuentra fuera de su residencia, y, en caso de incumplimiento, deberá ser conducida a Evaluación Epidemiológica con fines sanitarios, en un Centro de evaluación a cargo del Ministerio de Salud, para la contención de la Pandemia COVID19 (Centro de Contención)<sup>3</sup>, pero no se expresa qué pasará si se constata que es persona que no representa riesgo de contagio.

## **II. Atención de casos y gestiones institucionales**

### *1. Perfil de víctimas por edades y género*

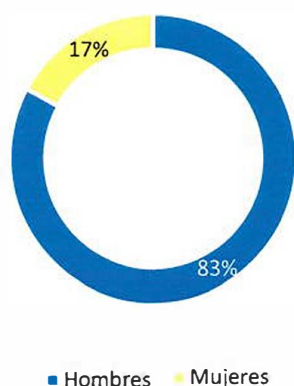
En el periodo comprendido entre el 21 de marzo y el 9 de abril, la PDDH ha conocido la situación de **356 personas** que en diversas circunstancias han sufrido la violación de sus

---

<sup>2</sup> Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de Habeas Corpus 148-2020 emitida a las trece horas con diez minutos del ocho de abril de dos mil veinte.

<sup>3</sup> Policía Nacional Civil. Protocolo de Actuación Policial para la intervención de personas que incumplan la Cuarentena Domiciliar, su ingreso o salida de los Centros de Contención, en función del cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 14, en el Ramo de Salud, para la Prevención, control y Atención de la Pandemia COVID19

Total de personas por género

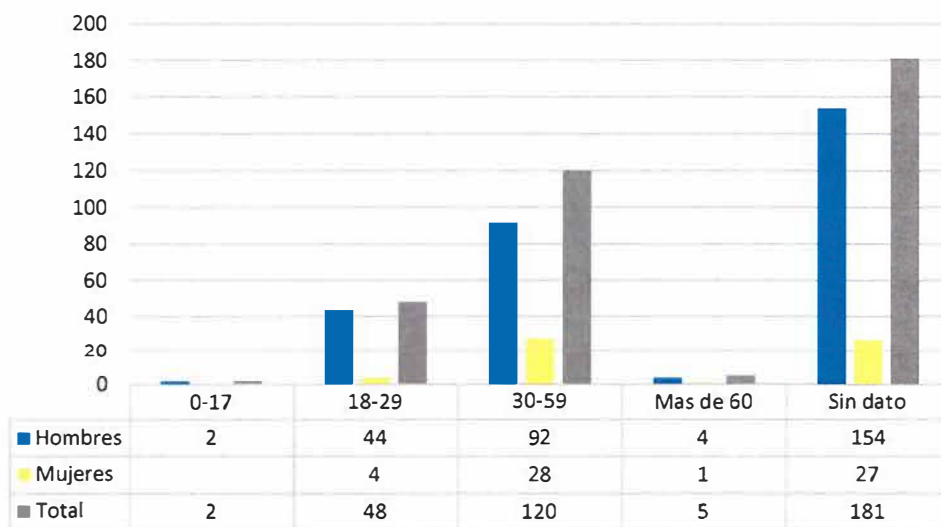


derechos, especialmente a partir de actuaciones de las autoridades de seguridad pública. De este total, **296 son hombres (83%) y 60 mujeres (17%).**

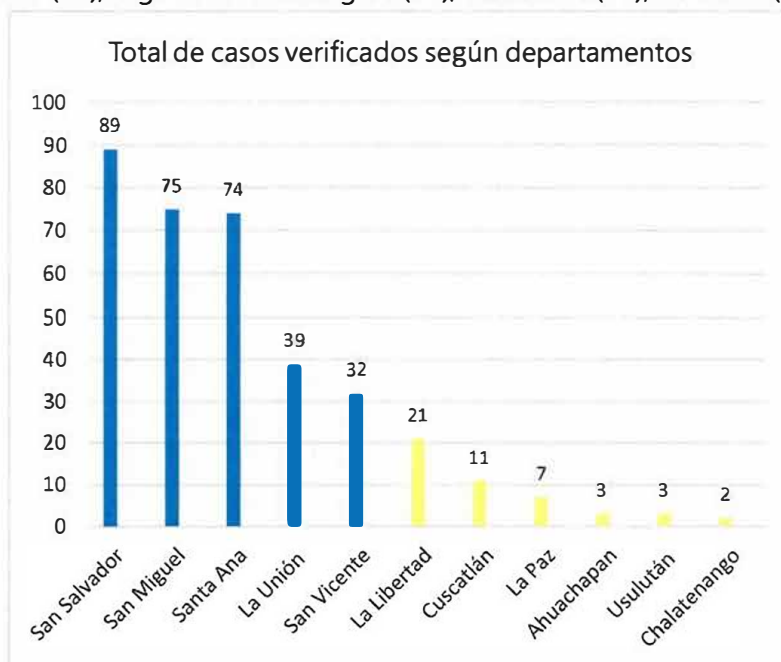
Teniendo en cuenta la excepcionalidad del contexto que no ocupa, no se ha podido recabar información completa sobre las edades de las personas víctimas; sin embargo,

de los datos obtenidos, las más recurrentes son las comprendidas entre los **30 y los 59 años**, tanto para hombres como mujeres.

Total de personas por grupos de edad



En relación a los departamentos, según los casos verificados, la mayoría se reportan en San Salvador (89), seguido de San Miguel (75), Santa Ana (74), La Unión (39) y San Vicente (32).



## 2. *Derechos vulnerados y autoridades vinculadas*

En relación a los derechos afectados, el **79% de las situaciones verificadas se refiere a violaciones al derecho a la libertad personal**, específicamente por detenciones ilegales<sup>4</sup> correspondientes a 282 casos. El motivo principal de tales detenciones es la presunción arbitraria de haber incumplido la cuarentena.

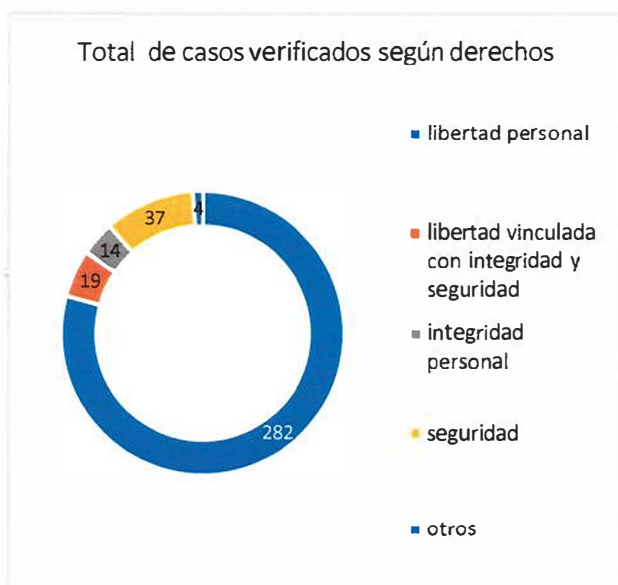
También se han presentado casos (19) en los que se reportan detenciones ilegales acompañadas de violaciones al derecho a la integridad personal<sup>5</sup> y la seguridad; es decir, que los procedimientos policiales realizados, en algunos casos constituyen malos tratos,

<sup>4</sup> mediante la aplicación de los decretos ejecutivos 12 de fecha 21 de marzo 2020; y 14 de fecha treinta de marzo 2020 que no tienen un asidero legal para ello tal como lo ha resuelto la Sala de lo Constitucional en el expediente HC-148-2020,

<sup>5</sup> Como el ocurrido el día 11 de abril 2020 en donde un joven de 19 años de edad fue herido de bala en el municipio de San Julián, Sonsonate.

cruelles inhumanos o degradantes<sup>6</sup>, actos arbitrarios y expresiones de violencia<sup>7</sup>. De manera individual, la integridad personal por esos mismos hechos ha sido verificada en 14 ocasiones. De igual manera, en los casos verificados se encuentran las vulneraciones al derecho a la **seguridad personal**, que representan el 11% de las situaciones (37 casos); especialmente por acciones vinculadas a acoso policial y allanamiento ilegal de residencias. Una cuestión relevante en este aspecto es la referida a actuaciones policiales contra personas que se dedican al comercio informal, a pesar que este sector está conformado mayoritariamente por mujeres en situación de pobreza y exclusión.

Los casos vinculados a violaciones al derecho a la propiedad y el trabajo (4) también están vinculados con este sector laboral, y se encuentran referidos a situaciones en las que se les ha decomisado sus herramientas de trabajo o mercadería.



En ese contexto es importante destacar que luego de las declaraciones y disposiciones dictadas por el señor presidente de la República, en cadena nacional ante medios de comunicación, el seis de abril del presente año, se incrementó el conocimiento de hechos que atentan contra la libertad e integridad personal. Entre estos puede destacarse los casos de personas detenidas ilegalmente mientras se

trasladaban a sus trabajos, a comprar alimentos o medicinas, entre otras circunstancias.

<sup>6</sup> Como el hecho de poner a desfilas a jóvenes, una vez fueron retenidos por presuntamente violentar la cuarentena domiciliar, en el municipio de Tepecoyo, departamento de La Libertad.

<sup>7</sup> Como el hecho ocurrido en colonia El Milagro del municipio de Comalapa, La Paz, en donde agentes policiales le gritaron a personas (mujeres) adultas mayores que lavaban ropa en un río (por carecer de agua potable en sus residencias) que no tenían nada que estar haciendo en ese lugar porque había cuarentena; y además a una de ellas le rociaron gas pimienta.



Entre las actuaciones policiales denunciadas se señalan amenazas de golpes y de detención al grupo familiar, toma de fotografías, presentación ante los medios de comunicación, plantones bajo el sol sin agua y alimentos, entre otros castigos. También se ha denunciado situaciones en las que personas que no tienen acceso a agua potable han sido amenazadas por lavar ropa en ríos cercanos a su residencia, o personas que se dirigían a comprar mercadería para su subsistencia han sido amenazadas e insultadas por personal policial, de lo cual se ha pedido explicación a las autoridades correspondientes<sup>8</sup>.

Cabe señalar que los hechos violatorios señalados, han sido cometidos por agentes mayoritariamente de la Policía Nacional Civil, en segundo lugar de la Fuerza Armada de El Salvador y minoritariamente de Cuerpo de Agentes Metropolitanos o Municipales.

Finalmente, debe señalarse que durante la presente emergencia nacional, también se ha verificado **afectaciones al derecho a la libertad de prensa y libertad de expresión** por parte de agentes de seguridad pública, especialmente restringiendo la labor de radios comunitarias y periodistas independientes, destruyendo material periodístico o limitando de forma indebida realizar preguntas o entrevistas en las conferencias de prensa vinculadas a la emergencia<sup>9</sup>.

### *3. Gestiones institucionales realizadas.*

Con base a los casos verificados, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha realizado una serie de acciones a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos durante la emergencia. En ese sentido se han elaborado **cinco posicionamientos públicos y una medida cautelar** referidos a actuaciones policiales atentatorias. En estos casos, se ha advertido un contexto de improvisación, insuficiencia de controles internos, falta de equipos e insumos adecuados para la protección tanto de las personas que circulan como

---

<sup>8</sup> Resolución inicial de Expediente SS- 0171-2020 emitida a las dieciséis horas del siete de abril de dos mil veinte

<sup>9</sup> Pronunciamiento ante las restricciones a la libertad de prensa y libertad de expresión en el contexto de la emergencia por la pandemia de COVID-19, emitido el dos de abril de 2020

del personal policial y militar, lo cual abona al cometimiento de acciones violatorias contras los derechos humanos.

En ese mismo orden, se abrieron 7 expedientes, de los cuales se realizó su respectiva resolución inicial; se elaboraron y se remitieron diferentes oficios a autoridades estatales. De manera particular se ha emitido la resolución del expediente SS-0171-2020 en fecha 8 de abril del 2020, en el cual se solicitó al Director de la PNC informar sobre la legalidad de las privaciones de libertad cometidas, de las amenazas hechas a personas, y su traslado a delegaciones policiales en los casos vinculados a supuesta violación a la cuarenta domiciliar decretada por el Ejecutivo. Asimismo se ha petitionado al referido profesional las razones por las que se expone ante los medios de comunicación sin su consentimiento a las personas detenidas por la causa antes mencionada.

De igual manera se emitió medida cautelar para garantizar las condiciones sanitarias en el centro de contención habilitado en el Palacio de los Deportes (INDES) pidiendo se suministre los equipos y la atención médica necesaria y suficiente para evitar la propagación del COVID-19 entre las personas retenidas, asimismo se petitionó informar sobre las condiciones de seguridad en el mismo, los criterios que se consideraron para restringir la libertad de las personas que han sido llevadas a ese centro de contención, así como de las acciones realizadas para cumplir con las medidas cautelares emitidas por la Sala de lo Constitucional, y las condiciones de las personas que se encuentran en ese y otros Centros de Contención a donde estaban trasladando a personas que detenían.

Al respecto, el Director de la PNC contestó que las actuaciones de la PNC se enmarcan en los DL No. 593 y 594 de 14 de marzo 2020, y en los Decretos Ejecutivos 6 y 13 del 11 de marzo 2020 ; y 12 de fecha 21 de marzo 2020<sup>10</sup>.

Por otro lado, se ha mantenido comunicación telefónica con las personas denunciantes, a quienes se entrevistó y se les informó sobre el estado de su denuncia. Se ejecutaron otras gestiones como reuniones con autoridades locales, manteniendo un monitoreo diario de las situaciones.

---

<sup>10</sup> Oficio PNC-DG-N° 135-0903-2020 con fecha 7 de abril del 2020.

Asimismo se ha mantenido principalmente comunicación con jefaturas de delegación PNC, a quienes se solicitó informes sobre los hechos. Se activó diferentes instancias entre las que se destacan SIBASI, ISDEMU, PGR, FGR; Secretaría de Responsabilidad Profesional y la Inspectoría General de Seguridad Pública.

Los resultados que se han obtenido de las gestiones antes descritas primordialmente, han sido, en algunos casos, la puesta en libertad de algunas personas detenidas ilegal o arbitrariamente, trasladándolas a sus domicilios por parte de las autoridades policiales.

En 4 casos se ha iniciado proceso interno disciplinario por parte de la corporación policial y en igual número de casos, se está a la espera de respuesta de las autoridades a las que se ha requerido informes.

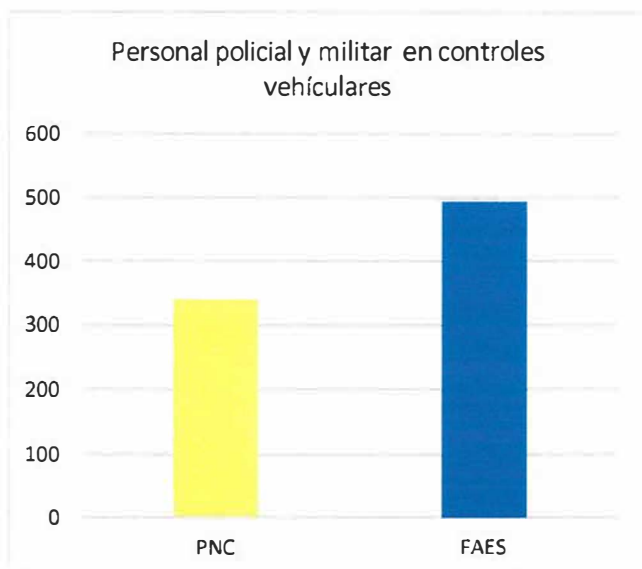
Igualmente se ha brindado información y ubicación a familiares de personas detenidas.

Finalmente, en el caso de un grupo de personas de nacionalidad Nicaragüense que se encontraban en el departamento de La Unión, sin poder salir de El Salvador, se realizaron gestiones con autoridades a efecto que retornaran por vía marítima a su país de origen, emitiendo la resolución correspondiente.

### **III. Verificación de controles vehiculares**

En el periodo comprendido entre el 31 de marzo y el 11 de abril de 2020 se verificó **181 controles vehiculares** realizados por la PNC y Fuerza Armada a nivel nacional. Estas verificaciones tuvieron como objetivo registrar las directrices institucionales que reciben las autoridades de seguridad pública y verificar el cumplimiento de las mismas en el marco de los decretos legislativos y ejecutivos emitidos en el marco de la actual emergencia nacional.

Asimismo se pretendía conocer las condiciones laborales del personal policial y militar, especialmente en relación al suministro de insumos para prevenir el contagio de COVID-19.



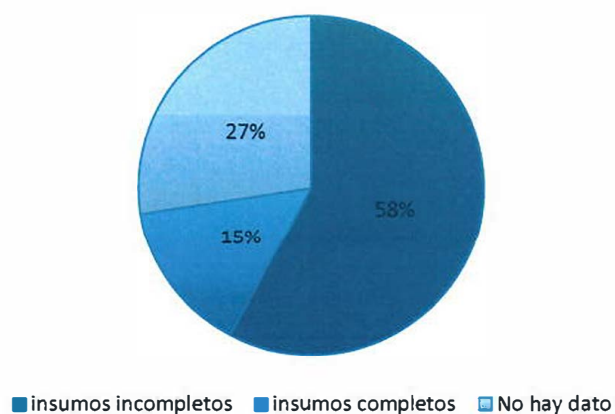
En ese sentido, a partir de los datos obtenidos, puede destacarse en primer lugar la **ausencia de las autoridades** encargadas de vigilar los procedimientos de actuación, específicamente la Inspectoría General de Seguridad Pública y la Inspectoría de la Fuerza Armada. Asimismo, la **mayor presencia de personal militar** en los respectivos controles

vehiculares, contando con 493 elementos frente a 340 policías.

Por otro lado, en las verificaciones realizadas se ha registrado un total de **2125 personas intervenidas** durante los controles vehiculares.

En un principio, según la información recibida, las directrices con las que cuentan los agentes policiales y los militares están referidas a corroborar el motivo del viaje y el cumplimiento de la restricción de dos personas por vehículo. También se verifica las medidas adoptadas por el transporte público, en relación a disponer de alcohol gel y mantener durante el trayecto a una persona por asiento.

Personal de seguridad que cuenta con insumos sanitarios de protección



Luego de la cadena nacional emitida por el señor presidente de la república el día 6 de abril de 2020, las directrices encontradas fueron diferentes, ya que se tenía la instrucción de ser más "duros" con la población y toda aquella persona que no justificara la razón por la cual se encontraba circulando, automáticamente era retenida y conducida a un centro de

contención; incluso en una entrevista realizada a un miembro de la PNC, éste manifestó que “ya tenían el escudo” para actuar con más dureza.

En relación a las condiciones laborales **solamente el 15% del personal de seguridad cuenta con insumos sanitarios completos para protegerse** del contagio de COVID-19 tales como mascarillas, alcohol gel y guantes. Y en el 58% de los casos verificados se registró la utilización de algunos insumos, especialmente mascarilla, aclarando que en estos casos, las mismas han sido compadras por cuenta propia o proporcionadas por otras instituciones públicas (unidades de salud, alcaldías) y por las mismas comunidades.

#### **IV. Ejemplo de algunos casos concretos conocidos por PDDH.**

1.- Mediante denuncia interpuesta el siete de abril del presente año, por persona que solicitó que su identidad se mantuviera bajo reserva de confidencialidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 34 inciso final de la Ley que rige a la PDDH se conoció: que a las doce y treinta horas, del mismo día, el joven Asdrubal Antonio Escobar Henríquez, residente en la Urbanización Prados de Venecia, jurisdicción de Soyapango, salió de su vivienda para pasear a dos de sus mascotas, ya que están educados para hacer sus necesidades fuera de casa, regresando a su casa custodiado por tres agentes policiales; y luego al lugar llegó un contingente de agentes policiales y militares para llevarse al joven.

Ese mismo día, personal de esta Procuraduría entrevistó al joven Escobar Henríquez, quien confirmó los hechos, expresó que se le acercaron diez agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que le preguntaron si no había visto las noticias del día anterior, a lo que respondió que sí, por lo que le dijeron que procederían a su detención amenazando con golpearlo si oponía resistencia, le tomaron fotografías y amenazaron que detendrían a su familia si también salían de la casa, que ya sabían dónde vivían y solo llegarían a traerlos.

Agregó, que momentos después, llegaron tres patrullas con aproximadamente veinticinco agentes policiales y militares, quienes trataron de esposarlo; pero él les manifestó que no había cometido ningún delito, por lo que lo subieron a una patrulla y lo llevaron a la Delegación Policial de Soyapango-Ilopango, ubicándolo en el sol, junto a un grupo de personas detenidas al parecer por incumplir la cuarentena domiciliar y los presentaron a los medios de comunicación; después los llevaron a una cancha de basquetbol, manifestándoles

que este mismo día serían trasladados a un centro de contención ubicado en Lourdes Colón. Señaló que les quitaron los teléfonos celulares, pero luego de insistir en que no eran delincuentes, se los devolvieron, exigiéndoles que no los usaran.

2.- Una señora denunció que salió de su vivienda a horas del mediodía con su hijo de 29 años de edad, ya que él iría a comprar las tortillas y ella a dejarle alimentos a su madre, que se encontraban en la Colonia Las Margaritas del Municipio de Soyapango, cuando dos agentes de la Policía Nacional Civil y aproximadamente seis soldados detuvieron a su hijo, lo esposaron y lo llevaron al puesto de la PNC de la Colonia Santa Gertrudis del mismo municipio y luego fue llevado al Centro de Contención conocido como Villa Olímpica.

3.- Otra señora denunció que su esposo fue detenido por agentes de la PNC, a las diez de la mañana frente a la Delegación de la Policía Nacional Civil de San Bartolo, pues salió a comprar, pero luego vio que cerca del lugar estaba abierto un carwash, por lo que varios agentes se le acercaron y se lo llevaron detenido por incumplir la cuarentena.

Junto a su hija la señora Díaz, se apersonó a la delegación de la PNC, para obtener información, y un agente les dijo que al citado señor lo habían remitido a un centro de contención, pero no les dijo a cuál; y que en ese lugar les daban comida. Minutos después agrega que recibió llamada del referido señor, quien desmintió lo informado por el agente, ya que le manifestó que el soldado se había compadecido de él y le prestó su teléfono para comunicarse con ella y le expresó que aún estaba en la delegación policial y los habían tenido en el sol desde que llegaron, sin darles agua solo una mascarilla y sin haber ingerido alimentos.

4.- En colonia El Milagro, Comalapa, Departamento de La Paz, Mujeres, en su mayoría señoras de edad, una persona por familia, fueron al río cercano a su lugar de residencia a lavar ropa, debido a que en su colonia no "cae agua". Agentes de la Policía Nacional Civil del puesto policial cercano a la colonia, les gritaron y amenazaron, expresando que tenían orden de "llevarse" a todos los que encontraran en "la calle". Uno de los agentes policiales, que es el que más gritaba les roció gas pimienta, al tiempo en que les gritó que se fueran a sus casas.

5.- En el Distrito Italia, municipio de Tonacatepeque, dos mujeres que se dedican al

comercio informal se dirigían hacia el Mercado "La Tiendona", para comprar vegetales que luego revenderían en las inmediaciones de su lugar de residencia; sin embargo, fueron abordadas irrespetuosamente por el jefe del puesto policial de la localidad, quien les negó el paso y les amenazó con detenerlas. Ante los reclamos de una de ellas, adujo que el Presidente no había prohibido sacar ventas de fruta y verdura y que ellas portaban mascarillas, ante lo cual el servidor público la empujó, cayendo al suelo y resultando con laceraciones en manos y rodillas. Su compañera le ayudó a ponerse en pie y debieron regresar a sus casas.

6.- En la colonia Campos Verdes, Lourdes, Colón, La Libertad, una persona que se dirigía a su trabajo a bordo de una motocicleta fue detenido por la PNC y FAES, y le expresaron que el Presidente había dicho que no quería ver a nadie en las calles por lo que procedieron a detenerlo y decomisarle su motocicleta.

7 En la colonia Campos Verdes, Lourdes, Colón, La Libertad, una persona adulta mayor denunció que mientras se dirigía a pie a hacer compras de alimentos, recibió insultos de un agente de la PNC, junto a otro policía y tres militares, profirió además burlas relacionadas a que mejor fuera a morir en casa, y le ordenaron devolverse en su camino, no permitiéndole hacer compras básicas.

8.- De acuerdo a noticias periodísticas de El Confidencial SV, (Twitter), se refiere que más de una centena de personas han sido detenidas por la PNC en el departamento de San Miguel, mientras se dirigían a comprar alimentos y medicina. Agregan que les decomisaron sus teléfonos, borraron videos y les obligaron a firmar un acta eximiendo de responsabilidad a la PNC.

9.- En el municipio de Apopa, San Salvador, un Joven fue detenido a inmediaciones del mercado municipal, mientras se dirigía hacia su trabajo, cerca de las 11:00 a.m. Le expresaron sería llevado al Centro de Contención de Villa Olímpica.

10.- Según nota periodística<sup>11</sup>, el día 10-04-2020, un joven de 19 años de edad fue herido de bala en sus dos piernas por parte de un elemento de la PNC, al negarse a entregar

---

<sup>11</sup> En San Julián, un joven fue baleado por policía que le pidió soborno de \$50 para no enviarlo a albergue <https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/sonsonate-cuarentena-covid-19/704907/2020/>

cincuenta dólares para no ser remitido a un centro de contención.

11.- Según el informativo digital NotiApopa<sup>12</sup>, el día 11-04-2020 varios agentes de la PNC agredieron físicamente a empleados de una unidad de transporte colectivo de la ruta 371 que hace su recorrido de San Jorge a Usulután; y viceversa.

## **V. Consideraciones y Recomendaciones**

1. Cualquier medida estatal que se adopte encaminada a restringir derechos o garantías constitucionales debe ajustarse a los principios «pro persona», proporcionalidad, temporalidad, y tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral, como el debido y oportuno cuidado a la población<sup>13</sup>; por lo tanto, deben evitarse acciones y discursos públicos destinados a castigar, humillar o afectar los derechos de personas que presuntamente vulneren la cuarentena domiciliar.
2. De manera particular en el caso de incumplimiento de las medidas de prevención adoptadas por el Estado salvadoreño, la PNC y la Fuerza Armada deben hacer uso de la fuerza respetando siempre los estándares internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad, privilegiando los medios disuasivos como la presencia y los comandos verbales.
3. Debe detenerse el crecimiento innecesario y arbitrario de la población retenida ilegalmente e enviada a los centros de contención por el presunto incumplimiento de la cuarentena domiciliar, en tanto que éstos pueden ser un espacio vulnerable para el contagio y la propagación del virus COVID-19.
4. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada tienen la responsabilidad de actuar en todo momento respetando los derechos humanos de las personas. De manera particular, la vida, la dignidad e integridad son derechos que no pueden suspenderse ni siquiera en estados de excepción. Asimismo debe abstenerse de restringir el trabajo y la circulación de las y los periodistas y personas defensoras de derechos

---

<sup>12</sup> Empleados de ruta reportan como los dejaron varios PNC. <https://www.apopaonline.com/110420-xx/>

<sup>13</sup> CIDH “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” Resolución 01/2020 de fecha 10-04-2020. Pág. 9



humanos que cumplen una función central en esta emergencia con el objeto de informar y monitorear las acciones estatales<sup>14</sup>.

5. Es importante que se actualice, mejore (esclareciendo qué se hará con aquellas personas que luego del chequeo médico respectivo se concluya que no sin puente de contagio de COVID-19) y difunda de manera oportuna entre el personal policial y población en general a través de formatos accesibles e inclusivos el Protocolo de Actuación ante el incumplimiento de la cuarentena domiciliar, garantizando un enfoque de género, intersectorial y de derechos humanos, en atención a las recomendaciones de esta Procuraduría, las decisiones emitidas por la Sala de lo Constitucional y la normativa nacional e internacional de derechos humanos.
6. Asegurar en el terreno (no en el escritorio) la supervisión de la Inspectoría General de Seguridad Pública; y la Inspectoría de la Fuerza Armada para el control de las actuaciones policiales y militares en la situación de emergencia que vive El Salvador.
7. Garantizar la aplicación de medidas preventivas de higiene, acceso, uso de equipos y medidas de protección para el personal policial y militar con el fin de evitar el contagio o ser fuente de transmisión del COVID 19 en sus operaciones o con sus familias.
8. Cumplir con todos los requerimientos formulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución 1/2020 de fecha 10-04-2020.

  
José Apolonio Tobar Serrano  
Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos.

---

<sup>14</sup> Ibíd. Pág. 14